



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024.Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

Solicitud: 231285300020224

Apreciable persona solicitante:

Normatividad aplicable como Sujeto Obligado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Para esta XVIII Legislatura es muy importante dar respuesta plena a las solicitudes de información que se nos haga, es por ello que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 6º, 7º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 19º; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículo 19.2.; la Convención Americana de Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica" artículo 13.1; artículos 17º y 21º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; en los artículos 111, fracciones II, IV, V del artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; artículos 1º, 2º, 3º fracciones VIII, XIV y XXVII, 8, 54, 62, 64, 66 fracciones II, IV, V y XIX, 150, 151, 154 y 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, con el fin de darle respuesta a su solicitud de la mejor forma, se le contesta de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

A. MEDIO DE ACCESO.

Con fecha 09 de octubre de 2024, siendo las 21:56 horas, ingresó a través del sistema Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de información a la que recayó el folio número **231285300020224**, misma que cuenta con fecha oficial de recepción el día 10 de octubre del año en curso, mediante la cual se requiere lo siguiente:

"Respecto a las siguientes personas:

Bernardo Roberto Jiménez Duarte

Daniel Robertos Cetina

Martha Teresa Medina Lozano

Luz Margarita González López

Joaquín Valentín Tun Alonzo

Hassan Javier Villanueva Ortega

Javier Abraham Ayuso Sánchez

Leny Adriana Prado Lima

Luis Antonio Estrada Peña

María Cristina Coronado Cruz

Requiero se me informe:

1. Si laboran en la institución.

2. En caso de ser positiva la respuesta, señalar:

3. Fecha de ingreso

4. Fechas de reingreso en caso de ser diversas

5. Empleos, cargos o comisiones que ha ocupado

6. Empleo, cargo o comisión que ostenta actualmente

7. Tipo de contratación (plaza, base, contrato)

8. Ingresos totales que percibe

9. Área específica en que presta sus servicios o actividad, señalando domicilio

10. Horario en que presta sus servicios o desarrolla su actividad

11. Superior jerárquico inmediato.

12. Si se les ha levantado acta administrativa por alguna falta en la que hayan incurrido en la prestación

del servicio o actividad

En caso de ser afirmativa la respuesta al numeral anterior señalar:

a. Número de actas levantadas en los últimos 5 años;

b. Fecha de levantamiento de las actas;



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024.Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

c. Señalar motivo del acta o actas;

d. Señalar la sanción impuesta

13. Si se ha presentado alguna queja en su contra por alguna falta en la que hayan incurrido en la prestación del servicio o actividad

Número de quejas que ha recibido en los últimos 5 años;

b. Fecha de inicio de las quejas;

c. Señalar motivo de la queja, sexo de la persona que presenta la queja, área de adscripción de la parte

quejosa y parte agresora y cargo que desempeña cada una de las partes en el área de la institución en la

que están inscritas;

d. Referir el órgano o área que efectuó la investigación de los hechos denunciados en las quejas;

e. Señalar el status de las quejas;

f. Señalar si las personas quejosas siguen laborando en la institución;

14. Versión pública de su currículum vitae

15. Versión pública de sus últimas 5 declaraciones patrimoniales." (SIC)

PROCEDIMIENTO

Trámite

La Unidad de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 3º fracciones II, VIII, IX, XIV y XXVII; 66 fracciones II y IV; 143, 147, 151, 153, 154 y demás relativos y aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, requirió al área del Poder Legislativo que se relaciona con su solicitud llevando a cabo el siguiente trámite:

- I. Mediante oficio número **PLEQROOXVIII/UT/SAI/109/X/2024**, se solicitó a la **Dirección de Recursos Humanos del Poder Legislativo**, remita la información requerida; misma que dio respuesta a través del oficio **DRH/2273/2024**.
- II. Mediante oficio **PLEQROOXVIII/UT/SAI/110/X/2024**, se solicitó al **Órgano Interno de Control del Poder Legislativo**, remita la información requerida; misma que dio respuesta a través del oficio **PLEQROO/OIC/526/X-2024**.

En aras de privilegiar el derecho constitucional de acceso a la información, esta Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo hace de su conocimiento que, en términos de lo dispuesto por los artículos 64 y 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, es competente para realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información. En consecuencia, este órgano administrativo cuenta con la información necesaria a para emitir la siguiente:

RESPUESTA

En atención a lo anterior, se emite respuesta en los siguientes términos:

I.- La Dirección de Recursos Humanos, a través del oficio DRH/2273/2024, refiere:

"Derivado de lo anterior, y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos y base de datos que obran en esta Dirección de Recursos Humanos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito informar:

Que los (as) CC. Bernardo Roberto Jiménez Duarte, Daniel Robertos Cetina, Martha Teresa Medina Lozano, Luz Margarita González López, Joaquín Valentín Tun Alonzo, Hassan Javier Villanueva Ortega, Javier Abraham Ayuso Sánchez, Leny Adriana Prado Lima, Luis Antonio Estrada Peña, María Cristina Coronado Cruz, no laboran en este Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024.Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

Finalmente, los puntos números 13 y 15, resulta preciso mencionar que esta Dirección, no genera información relativa a los puntos petitorios solicitados.

Lo anterior, con el objeto de cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo."(SIC)

- I. **II. El Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, a través del oficio PLEQROO/OIC/526/X-2024, refiere:**

"[...]al respecto, me permito dar contestación a los siguientes puntos con relación a la descripción de la solicitud:

1.- Respecto a las siguientes personas:

Bernardo Roberto Jiménez Duarte

Daniel Roberto Cetina

Martha Teresa Medina Lozano

Luz Margarita González López

Joaquín Valentín Tun Alonzo

Hassan Javier Villanueva Ortega

Javier Abraham Ayuso Sánchez

Leny Adriana Prado Lima

Luis Antonio Estrada Peña

María Cristina Coronado Cruz

Requiero me informe:

1. **Si laboran en la Institución**
2. **En caso de ser positiva la respuesta, señalar:**
3. **Fecha de ingreso**
4. **Fechas de reingreso en caso de ser diversas**
5. **Empleos, cargos o comisiones que ha ocupado**
6. **Empleo, cargo o comisiones que ostenta actualmente**
7. **Tipo de contratación (Plaza, base, Contrato)**
8. **Ingresos totales que percibe**
9. **Área específica en que presta sus servicios o actividad, señalando domicilio**
10. **Horario en que presta sus servicios o actividad**
11. **Superior jerárquico inmediato**
12. **Si se les ha levantado acta administrativa por alguna falta en la que haya incurrido en la prestación del servicio o actividad. En caso de ser afirmativa la respuesta al numeral anterior, señalar:**
 - a. **Numero de actas levantadas en los últimos 5 años;**
 - b. **Fecha de levantamiento de las actas**
 - c. **Señalar motivo del acta o actas**
 - d. **Señalar la sanción impuesta**
13. **Si se ha presentado alguna queja en su contra por alguna falta en la que hayan incurrido en la prestación del servicio o actividad (sic)**

Número de quejas que ha recibido en los últimos 5 años;

b. fecha de inicio de las quejas;

c. Señalar motivo de la queja, sexo de la persona que presenta la queja, área de adscripción de la parte quejosa y aparte agresora y cargo que desempeña cada una de las partes en el área de la institución en la que están inscritas;

d. Referir el órgano o área que efectuó la investigación de los hechos denunciados en las quejas;

e. Señalar el status de las quejas;

f. Señalar si las personas quejas siguen laborando en la institución;



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

14. Versión pública de su currículum vitae

15. Versión pública de sus últimas 5 declaraciones patrimoniales" (SIC)

Por cuanto a los puntos marcados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14, me permito informarle que dicha información no es competencia de este Organismo Interno de Control, por lo que deberá solicitar dicha información a las áreas generadoras de información correspondiente.

Por cuanto al punto marcado como 13, me permito informar que me encuentro impedido para divulgar dicha información, en virtud de que de la información requerida, no solo identifican a una o varias personas, sino que, además, de acuerdo a lo que establecen los artículos 90 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 134, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en correlación con la fracción X del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la información y datos solicitados corresponden a un procedimiento para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos; en tal sentido, de ser el caso sin conceder que existiera información con relación a lo solicitado y atendiendo lo dispuesto por el artículo 1º Constitucional en correlación al principio de presunción de inocencia que debe imperar en los procedimientos de investigación y/o para fincar responsabilidades administrativas, resulta fundado proteger la información en las indagatorias con motivo de la solicitud que nos atañe.

Época: Décima Época

Registro: 2006590

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 7,

Junio de 2014,

Tomo /

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 43/2014 (10a.)

Página: 41

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 10. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024.Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

PRUEBA DE DAÑO

Ahora bien, los artículos 122, segundo párrafo y 135, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo señala:

Artículo 122.

[...]

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

[...]

Artículo 135. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

Es por ello que, en atención a lo señalado por el suscrito en relación a lo solicitado en el numeral 13 del oficio de solicitud de la información, procedo aplicar la prueba de daño impuesta en la Ley, en los siguientes términos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, apartado A, fracción I, reconoce como un Derecho Humano, el acceso a la información pública, pues señala que "... Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de su facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de información..."

Lo cual, se produce y amplía en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, cuando en el artículo 6, establece:

"Artículo 6. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados. Ésta información es pública y será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en esta Ley; sólo podrá ser clasificada excepcional y temporalmente como reservada por razones de interés público en los términos dispuestos por esta Ley."

Empero, ese Derecho Humano de acceso a la información si bien es progresivo, no es absoluto, pues existen casos en que su limitación se encuentra justificada, correspondiendo al Estado justificar con información suficiente y argumentos pertinentes la necesidad de esa medida.

Así precisamente se pronunciaron los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente Tesis de Jurisprudencia que al efecto establece:

"Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2013215

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a. CCXCIII/2016 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016,

Tomo 1, página 377



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024.Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

Tipo: Aislada

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 10. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que ésta, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tiene prioridad *prima facie* frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos."

Bajo este criterio, es que, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se contemplan los casos de excepción al derecho de acceso a la información, siendo cuando la información se considera clasificada, ya sea por ser reservada o confidencial.

En el caso en particular, la información solicitada, como se dijo con antelación, se considera como clasificada por ser reservada, en términos de lo dispuesto en el artículo 134, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

A continuación, se cita la porción normativa, que señala:

[...]

VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; [...]

Se afirma lo anterior, ya que de publicarse la información relativa a los expedientes de investigación y de procedimientos para fincar responsabilidades administrativas, que se integran con motivo de las quejas y/o denuncias por presuntas faltas administrativas presentadas ante este Órgano, se vulneraría la conducción de lo actuado dentro de dichos procedimientos. Lo anterior, también en el entendido de que de acuerdo al principio de presunción de inocencia que se aplica a los procedimientos administrativos, mientras no exista determinación de responsabilidad ejecutoriada, no es posible señalar la culpabilidad de las personas que se encuentran dentro de una investigación, por ello se estaría vulnerando también los derechos de terceras personas.

Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia:

Época: Décima Época



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

Registro: 2006590

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 7,

Junio de 2014,

Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 43/2014 (10a.)

Página: 41

PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 10. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

De ahí que, el caso particular, la clasificación de la información solicitada se ajusta a los supuestos previstos por la norma legal invocada como fundamento.

No obsta decir, que para la acreditación de la justificación a que hace mención el primer párrafo, del artículo 125, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, referente a la prueba de daño, no es necesario, per se, el que se aporten medios de prueba por parte del sujeto obligado para sustentar la determinación, sino que, es necesario que los argumentos desarrollados para la clasificación de la información sean sólidos, que en el caso que nos atañe, así acontece.

Ello conforme a la siguiente Tesis Aislada, que señala:

"Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2018460

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: 1.100.A. 79 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018,

Tomo III, página 2318

Tipo: Aislada



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024.Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

PRUEBA DE DANO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APOORTE. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto estreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados."

Finalmente, se deberá ponderar que este Órgano Interno de Control a mi cargo, como sujeto obligado, me encuentro estreñido a lo que establece artículo 54, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, a proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.

Por todo lo anterior, me permito remitir el expediente que se solicita clasificar como información reservada:" (sic)

NÚMERO	NOMENCLATURA QUE IDENTIFICA AL EXPEDIENTE	TIPO DE EXPEDIENTE
1	PLE/OIC/SIRA/AIV/EPRA/018/2023.	INVESTIGACIÓN
2	PLE/OIC/SIRA/AIV/EPRA/021/2023	INVESTIGACIÓN
3	PLE/OIC/SIRA/AIV/EPRA/035/2023	INVESTIGACIÓN
4	PLE/OIC/SIRA/AIV/EPRA/037/2024	INVESTIGACIÓN

Por cuanto al punto 14. Versión pública de sus últimas 5 declaraciones patrimoniales, me permito señalar lo siguiente:

De los C.C. Daniel Robertos Cetina, Luz Margarita González López, Hassan Javier Villanueva Ortega, Javier Abraham Ayuso Sánchez, Leny Adriana Prado Lima y María Cristina Coronado Cruz, NO se encontró registro alguno tanto en el Sistema DECLARANET como en el SISTEMA DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES, ambos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

Respecto a la persona Bernardo Roberto Jiménez Duarte, me permito informarle que presentó: En el Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo:

- En el 2022, la declaración en la modalidad INICIAL.
- Por cuanto a su obligación de rendir la declaración de situación patrimonial en la modalidad de CONCLUSIÓN correspondiente al ejercicio 2022, dicha persona SE ENCUENTRA OMISA YA QUE NO LA PRESENTÓ dentro del plazo señalado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 33.



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024.Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

Respecto a la persona Martha Teresa Medina Lozano, me permito informarle que presento las siguientes declaraciones:

En el Sistema denominado "Declaranet" del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo:

- **En el 2020, la declaración en la modalidad INICIAL.**
- **En el 2020, la declaración en la modalidad MODIFICACIÓN (ANUAL).**

En el Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo:

- **En el 2020, la Declaración en la modalidad de MODIFICACIÓN relativa al ejercicio 2019.**
- **En el 2021, la Declaración en la modalidad de CONCLUSIÓN.**

Respecto a la persona Joaquín Valentín Tun Alonzo, me permito informarle que presentó las siguientes declaraciones:

En el Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo:

- **En el 2021, la Declaración en la modalidad de INICIAL.**
- **En el 2022, la Declaración en la modalidad de MODIFICACIÓN relativa al ejercicio 2021.**
- **En el 2023, la Declaración en la modalidad de MODIFICACIÓN relativa al ejercicio 2022**
- **En el 2024, la Declaración en la modalidad de CONCLUSIÓN.**

Respecto a la persona Luis Antonio Estrada Peña, me permito informarle que presentó las siguientes declaraciones:

En el Sistema denominado "Declaranet" del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo:

- **En el 2020, la declaración en la modalidad MODIFICACIÓN (ANUAL) relativa al ejercicio 2019.**

En el Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo:

- **En el 2021, la Declaración en la modalidad de MODIFICACIÓN relativa al ejercicio 2020.**
- **En el 2022, la Declaración en la modalidad de MODIFICACIÓN relativa al ejercicio 2021.**
- **En el 2023, la Declaración en la modalidad de MODIFICACIÓN relativa al ejercicio 2022.**
- **En el 2024, la Declaración en la modalidad de MODIFICACIÓN relativa al ejercicio 2023.**

Asimismo, es importante precisar lo siguiente respecto a las declaraciones citadas con antelación:

Por cuanto, a la solicitud de los archivos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, referente a los años 2019 y 2020, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

Asimismo, el párrafo sexto del artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, prevé que una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determinara los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarían sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal; sin embargo, ese mismo Transitorio dispuso en su párrafo tercero que el cumplimiento de las obligaciones previstas, serían exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador, de conformidad



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024.Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

con la ley de la materia, emitiera los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia.

Siendo que en fecha 16 de noviembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitió el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses; y se expidieron las normas e instructivo para su llenado y presentación, el cual sería obligatorio para todos los servidores públicos a partir del primero de mayo de 2019. Sin embargo en fecha 11 de diciembre de 2019, en su Tercera Sesión Extraordinaria 2019 el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tuvo a bien aprobar el "ACUERDO POR EL QUE EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DA A CONOCER QUE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES SON TÉCNICAMENTE OPERABLES CON EL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE DECLARACIÓN DE INTERESES DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL, ASÍ COMO EL INICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRESENTAR SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES CONFORME A LOS ARTICULOS 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.", dicho acuerdo determinó que, a partir del 1 de mayo de 2021, serían operables en el ámbito estatal y municipal los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019, con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, a que hace referencia la fracción / del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ende, por lo que respecta a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses rendidas hasta el año 2020 por la persona servidora pública a las que refiere, al momento de haberlas rendido y al no encontrarse aplicables los formatos autorizados previstos en la citada Ley General, los cuales garantizan el resguardo de los rubros y datos cuya publicidad pueda causar una afectación en la vida privada o los datos personales protegidos por nuestra Carta Magna, nos encontramos con la imposibilidad de proporcionar la información en comento, aunado a que se requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo; por ello, es improcedente proporcionar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, toda vez que todas aquellas declaraciones presentadas previamente (hasta el 30 de abril del 2021) y en formatos diferentes a los autorizados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, carecen de la aprobación de la autoridad facultada para determinar los campos susceptibles de ser públicos y los de carácter confidencial, por tanto, no cuentan con la condición de publicidad establecida en la Ley antes referida, dependiendo su divulgación exclusivamente de la voluntad del servidor público. Por otro lado, dichos formatos autorizados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción fueron aplicables a partir del 1 de mayo del 2021, por ello, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, se encontrarían disponibles una vez que transcurra el plazo marcado por la citada Ley.

Por cuanto a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses rendidas a partir del 1 de mayo del 2021 en el Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, podrán consultarse las versiones públicas en la Plataforma Digital Nacional a través del link <https://www.plataformadigitalnacional.org/declaraciones>.”(SIC)

Ahora bien, respecto al numeral 13 de su solicitud de información, se hace de su conocimiento que, en la Tercera Sesión Extraordinaria, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro, el Comité de Transparencia del Poder Legislativo, emitió la resolución PLEQROOXVIII/CT/RI/01/2024, misma que confirmó la Reserva de la Información solicitada por el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, de los expedientes citados con anterioridad.

Adicionalmente, se le hace saber que la información se proporciona en los formatos donde las áreas responsables manejan la información, lo anterior en concordancia al artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, mismo que regula a los sujetos obligados disponiendo la forma en que éstos



Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

"XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Legislatura de la Justicia Social"

"Noviembre, mes del servicio Público en el Estado de Quintana Roo"

deberán entregar la información que obre en sus archivos y/o sistemas, con las características que en ellos se encuentren, no estando obligados al procesamiento de la información, ni a presentarla conforme al interés del particular, privilegiando la entrega de la información en Formatos Abiertos.

Agradecemos su interés por conocer las acciones que este sujeto obligado realiza, por lo que le invitamos a suscribirse al SISTEMA DE NOTIFICACIONES y recibir a su e-mail, información generada, como: Iniciativas; Decretos; Acuerdos; Leyes; Códigos; Boletines; Invitaciones; y más; para ello únicamente deberá registrarse en la siguiente liga: <http://www.systemaspodleg.gob.mx/boletines/>

También se le invita a visitar el portal de internet de este Poder Legislativo, donde podrá encontrar, entre otros datos, los nombres de los diputados que integran la XVIII Legislatura del Estado, así como las Comisiones que presiden y su conformación además de conocer las diversas actividades que, como parte del compromiso de ser un Parlamento Abierto, se realizan a diario en beneficio de los habitantes del Estado de Quintana Roo y visitantes a este. Para ello se le proporciona la siguiente liga en la que puede acceder a nuestro portal: <http://www.congresoqroo.gob.mx/>

Su interés y su preocupación por conocer las acciones cotidianas realizadas por este sujeto obligado denominado Poder Legislativo contribuyen en nuestra mejora continua, por ello me reitero a sus órdenes para atender cualquier duda o aclaración al presente, poniendo a su disposición los siguientes medios institucionales de comunicación: (983) 83 22822 Ext.1110 o bien al correo electrónico siguiente: accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx

Finalmente, se hace de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted podrá impugnarla en un término de quince días contados a partir de que le sea notificada, esto en cumplimiento con lo que establecen los artículos 168, 169, 170 y 171 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

ATENTAMENTE.

Lic. Nabile Estefanía Morales Cobos

Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.